

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA  
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 69/2023  
ACTOR: MUNICIPIO DE SAN PEDRO, ESTADO DE  
COAHUILA DE ZARAGOZA  
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS  
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS  
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE  
INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, a uno de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta al **Ministro Alberto Pérez Dayán, instructor en el presente asunto**, con la copia certificada de la demanda de controversia constitucional con sus anexos presentados por el Municipio de San Pedro, Estado de Coahuila de Zaragoza, que integran el expediente principal de la controversia constitucional indicada al rubro. Conste.

Ciudad de México, a uno de marzo de dos mil veintitrés.

Con la copia certificada de cuenta y como está ordenado en el proveído de admisión de esta fecha, **fórmese y regístrese el presente incidente de suspensión**, y para proveer sobre la medida cautelar, se tiene en cuenta lo siguiente.

En su escrito inicial el Municipio actor impugna el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, en los términos siguientes.

**“IV. NORMA GENERAL Y ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA.**

1. La Ley General de Comunicación Social, a través de sus artículos 26 específicamente a través de su penúltimo párrafo, y 45, que, para efectos de identificación de la ‘norma general’ cuya invalidez se demanda, se transcriben a continuación:

‘Art. 26.

...

El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1% por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.

...’

‘Art. 45. Cuando las personas servidoras públicas federales, de las Entidades Federativas, los municipios o las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México cometan alguna infracción prevista en esta Ley, se dará vista a la autoridad competente para conocer de los hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables’.

La Ley General de Comunicación Social se expidió el 11 de mayo de 2018. Su última reforma, que constituye el objeto de la presente reclamación, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el **27 de diciembre del 2022**.

2. Los efectos y consecuencias que derivan en forma directa de la Norma General reclamada, consistentes en:

2.1. La prohibición para ejercer el presupuesto municipal con apego a los principios de libertad y autonomía que establece la Constitución, en el ámbito de propaganda y comunicación social, en un porcentaje superior al 0.1 por ciento.

2.2. El inicio de procedimientos de sanción por y ante la Secretaría de la Función Pública, en contra de los servidores públicos pertenecientes a la entidad local actora, con motivo de ejercer un presupuesto superior al permitido por las normas generales reclamadas.  
(...)”.

Por otra parte, la promovente solicita la suspensión de los efectos y/o consecuencias de las normas impugnadas, para lo cual expresa lo que a continuación se reproduce:

### **“VIII. SUSPENSIÓN**

Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 14 al 18 de la Ley Reglamentaria del 105, solicito que se conceda la suspensión, contra los efectos y consecuencias que provienen de la entrada en vigor de la disposición general cuya invalidez se demanda, muy concretamente:

**a.** Para el efecto de que se permita al Municipio en cuya representación promuevo este juicio, llevar a cabo un ejercicio libre y autónomo de su presupuesto, en el que, siempre dentro del marco previsto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y también siempre en consideración al resto de disposiciones y mandatos impuestos por la Ley General de Comunicación Social, pueda llevar a cabo un ejercicio presupuestal superior al 0.1 por ciento del total de recursos presupuestales asignados, como también de aquellos que recaude en el ejercicio de las facultades soberanas que le concede la Ley; y,

**b.** Para el efecto de que las autoridades competentes de la Federación, tanto pertenecientes a la Auditoría Superior de la Federación, como a la Secretaría de la Función Pública (sic), se abstengan de fincar responsabilidad administrativa alguna en contra de los servidores públicos pertenecientes a la Administración Pública del Municipio actor, por llevar a cabo la asignación de recursos para gastos en materia de comunicación social, en un porcentaje superior al 0.1 por ciento del total del presupuesto de egresos que tenga autorizado, de manera contraria a lo dispuesto por el artículo 26, penúltimo párrafo, de la Ley General de Comunicación Social cuya invalidez se demanda.

La suspensión debe declararse procedente, en primer lugar, porque no se solicita propiamente con relación a la norma general impugnada, sino contra actos específicos que constituirán propiamente, actos inminentes de aplicación de aquella.

Por otro lado, la medida debe de ser procedente porque no se pone en riesgo, en modo alguno, la seguridad o la economía nacional. El propósito de la medida no conduce a suponer que habrá un gasto ilegal e indiscriminado en materia de propaganda o comunicación social, o que pudiera implicar una desatención de los principios y restricciones que la Constitución y la ley imponen a los servidores públicos en materia electoral, o de divulgación de la propia imagen, sino simple y sencillamente, que se respete la conducción de esa obligación que al Municipio le impone el artículo 134 constitucional, en los términos racionales, de honestidad, eficacia y eficiencia, en la forma y condiciones en que hasta antes de la entrada en vigor lo había venido realizando.

En otro sentido, la petición que se formula debe de ser acordada favorablemente, porque el efecto de la medida no contravendría ninguna institución fundamental del orden jurídico mexicano. Al revés, debe apreciarse, en términos de los conceptos de invalidez expresados, que en estricto sentido, la medida permitiría la conservación del Pacto Federal en materia de distribución de competencias del Estado Federal, ya que se facilitaría el mantenimiento del régimen de distribución competencial en

*materia presupuestaria previsto por el artículo 115 de la Carta Magna, y también, el cumplimiento puntual de las obligaciones que establece su artículo 134.*

*Asimismo, en atención a las condiciones expresamente propuestas, bajo las cuales se concedería la medida de suspensión contra los efectos derivados de la norma general cuya invalidez se demanda, la afectación que se causaría a la sociedad, que se mediría en proporción al gasto incurrido en comunicación social por encima del techo legalmente establecido, sería infinitamente mínimo, con relación al beneficio que se va a procurar, al permitir, por un lado, la salvaguarda actual y objetiva del derecho humano a la información -según función social de los medios de comunicación que esa misma Suprema Corte de Justicia ha definido-, y, además, por tratarse de un mecanismo imprescindible de conservación del principio de equidad en la contienda electoral, dada la época que alrededor de este tema se avecina.*

*En función de todas las consideraciones anteriores, y de que toda autoridad, incluida esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene el deber de velar por la salvaguarda y tutela de los derechos humanos, pido atentamente que se realice una interpretación conforme con la convencionalidad de la propia Ley Reglamentaria del 105, con la finalidad de que se facilite el cumplimiento del propósito primario de acceso a la justicia, y se conceda la suspensión solicitada”.*

Sobre el particular, es necesario indicar que tratándose de controversias constitucionales la suspensión se encuentra regulada en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos<sup>1</sup>, de cuyo contenido se advierte que:

1. Procede de oficio o a petición de parte, y podrá ser decretada en todo momento, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva;

---

<sup>1</sup> **Artículo 14.** Tratándose de las controversias constitucionales, el ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable.

La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales.

**Artículo 15.** La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.

**Artículo 16.** La suspensión se tramitará por vía incidental y podrá ser solicitada por las partes en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.

**Artículo 17.** Hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva, el ministro instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión por él mismo dictado, siempre que ocurra un hecho superveniente que lo fundamente.

Si la suspensión hubiere sido concedida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación previsto en el artículo 51, el ministro instructor someterá a la consideración del propio Pleno los hechos supervenientes que fundamenten la modificación o revocación de la misma, a efecto de que éste resuelva lo conducente.

**Artículo 18.** Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva.

**2. Procede respecto de actos que, atendiendo a su naturaleza, puedan ser suspendidos sus efectos o consecuencias;**

**3. No podrá otorgarse en los casos en que la controversia constitucional se hubiera planteado respecto de normas generales;**

**4. No se concederá cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante;**

**5. El auto de suspensión podrá ser modificado o revocado cuando ocurra un hecho superveniente que lo fundamente, y**

**6. Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional.**

En relación con lo anotado, el Tribunal Pleno emitió la jurisprudencia cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

**“SUSPENSIÓN EN CONTROVERSI A CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES.** *La suspensión en controversias constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, por lo que en primer lugar tiene como fin preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la parte actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente y, en segundo, tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general en tanto se resuelve el juicio principal, vinculando a las autoridades contra las que se concede a cumplirla, en aras de proteger el bien jurídico de que se trate y sujetándolas a un régimen de responsabilidades cuando no la acaten. Cabe destacar que por lo que respecta a este régimen, la controversia constitucional se instituyó como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, que tiene entre otros fines el bienestar de la persona que se encuentra bajo el imperio de aquéllos, lo que da un carácter particular al régimen de responsabilidades de quienes incumplen con la suspensión decretada, pues no es el interés individual el que se protege con dicha medida cautelar, sino el de la sociedad, como se reconoce en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”<sup>2</sup>.*

Ahora bien, este Tribunal Constitucional ha sustentado que la suspensión en medios de control constitucional participa de la naturaleza de las medidas cautelares, de ahí que tiene como fin preservar la materia del juicio asegurando provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia que en su caso declare fundados los conceptos de invalidez de

---

<sup>2</sup> Tesis 27/2008, Jurisprudencia, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil ocho, página mil cuatrocientas setenta y dos, registro digital 170007.

la parte actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente; además, tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general, en tanto se resuelve el juicio principal, vinculando a las autoridades contra las que se concede a cumplirla, en función de proteger el bien jurídico que se defiende, sujetándolas a un régimen de responsabilidades cuando no la acaten.

En ese orden de ideas, la suspensión constituye un instrumento provisional cuyo propósito es impedir que se ejecuten los actos impugnados o que se produzcan o continúen realizando sus efectos hasta en tanto se dicta sentencia en el expediente principal, para preservar la materia del juicio y evitar se causen daños y perjuicios irreparables a las partes o a la sociedad, siempre que la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, no se actualice alguna de las prohibiciones que establece el numeral 15 de la Ley Reglamentaria.

Precisado lo anterior, se determina que no procede otorgar la medida cautelar solicitada, ya que si bien el Municipio actor cuestiona la constitucionalidad de las reformas y adiciones a los artículos 26 y 45 de la Ley General de Comunicación Social, al considerar que violentan su autonomía presupuestal, el régimen de libre administración de la hacienda municipal, los principios rectores para el ejercicio del gasto público en comunicación social, y el derecho de acceso a la información pública municipal; también lo es que combate normas generales, de ahí que rige lo dispuesto en el artículo 14<sup>3</sup> de la Ley Reglamentaria, el cual prevé que la suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales y no se está en alguno de los supuestos de excepción que este Alto Tribunal ha considerado para concederla.

En efecto, en el caso, es importante subrayar que de la lectura integral a la demanda y sus anexos, no se advierte que se actualice la

---

<sup>3</sup> **Artículo 14.** Tratándose de las controversias constitucionales, el ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable. La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales."

excepción que ha establecido esta Suprema Corte, consistente en que puede otorgarse la suspensión en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales, siempre y cuando impliquen o puedan implicar la transgresión irreversible de algún derecho humano, supuesto en el cual sí es factible conceder la medida, más en casos en que de obligarse a cumplir el mandato de ley, el daño se vuelve irreparable o el propio juicio quede sin materia por ser, exactamente, ese el tema a decidir en el fondo; de manera tal que, de continuarse con su aplicación, ningún sentido tendría ya obtener un fallo favorable, pues la violación alegada se habría consumado<sup>4</sup>.

Esa excepción no se actualiza porque lo argumentado en la demanda, tanto en los conceptos de invalidez como en el capítulo de suspensión consiste en la violación a la libre administración de la hacienda municipal que protege el artículo 115, fracción II de la Constitución Federal, en virtud de que el artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social<sup>5</sup> ordena que el límite del gasto del programa anual de comunicación social, en su conjunto, no rebase el 0.1% del presupuesto de egresos anual correspondiente, lo que se relaciona con la función de gobierno municipal de decidir el monto de recursos que destine a la comunicación social, y el control del gasto público en términos del artículo 134 de la Constitución, lo que no demuestra de manera alguna la posible transgresión directa a derechos humanos y, por mayoría de razón, que esto resulte de modo irreparable.

No es óbice que el municipio actor alegue violación al derecho de acceso a la información y al principio de proporcionalidad, en virtud de que la disposición respecto de la cual solicita la suspensión, corresponde a una

---

<sup>4</sup> El criterio sobre la excepción mencionada deriva de la resolución dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de reclamación **32/2016-CA**, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, identificado con el rubro: **"SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU CONCESIÓN EN FORMA EXCEPCIONAL EN AQUELLOS CASOS EN QUE LA CONTROVERSIA SE HUBIERE PLANTEADO RESPECTO DE NORMAS GENERALES QUE IMPLIQUEN O PUEDAN IMPLICAR LA TRANSGRESIÓN DE ALGÚN DERECHO HUMANO. (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 14, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)"**.

<sup>5</sup> **Artículo 26.** [...]

El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.

En las Entidades Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social a que refiere este artículo deberá estar homologado con lo dispuesto en el párrafo anterior.

cuestión estrictamente presupuestal que no se vincula o impacta en forma inmediata y directa con el derecho y principio mencionados.

De igual forma no es obstáculo a lo que aquí se determina, el hecho de que el artículo 45 del ordenamiento reclamado precise que: *“Cuando las personas servidoras públicas federales, de las Entidades Federativas, los municipios o las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México cometan alguna infracción prevista en ella, se dará vista a la autoridad competente para conocer de los hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas”*, en virtud de que son actos en su caso, futuros que dependen de la observancia que los servidores públicos deben tener respecto de las obligaciones que les impone la Ley.

Una razón adicional para negar la suspensión solicitada, consiste en que la parte actora tampoco hace referencia a algún acto concreto, individualizado o particular de los preceptos cuestionados respecto del cual pudiera ser procedente la medida cautelar, sino que lo que efectivamente pretende es la suspensión de las disposiciones generales combatidas para que no se ejecuten; consecuentemente, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto, no es de concederse la medida cautelar solicitada.

En consecuencia, atendiendo a las circunstancias particulares del caso y con fundamento en los artículos 14 a 18 de la Ley Reglamentaria, se:

### **ACUERDA**

**Único.** Se niega la suspensión solicitada por Geovana Cruz Quistian, Síndico de Mayoría del Municipio de San Pedro, Estado de Coahuila de Zaragoza.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282<sup>6</sup> del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del 1<sup>7</sup> de la Ley Reglamentaria, en virtud de la naturaleza e importancia de esta medida

<sup>6</sup> **Artículo 282.** El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse. Si una diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin, sin interrupción, sin necesidad de habilitación expresa.

<sup>7</sup> **Artículo 1.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

cautelar, se habilitan los días y las horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones del presente acuerdo.

Finalmente, añádase al expediente para que surta efectos legales la impresión de la evidencia criptográfica de este auto, con apoyo en el artículo 9º del Acuerdo General **8/2020**, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**Notifíquese.** Por lista, por oficio a las partes y a la Fiscalía General de la República vía electrónica.

Por lo que hace a la notificación de la Fiscalía General de la República, remítasele la versión digitalizada del presente acuerdo por conducto del **MINTERSCJN**, regulado en el Acuerdo General Plenario **12/2014**; en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II<sup>9</sup>, de éste, el acuse de envío que se genere por el módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este auto, hace las veces del respectivo oficio de notificación. Asimismo, de conformidad con el numeral 16, fracción I<sup>10</sup>, de ese Acuerdo General Plenario, dicha notificación se tendrá por realizada al día siguiente a la fecha en la que se haya generado el acuse de envío en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que, como lo refiere el citado numeral, el personal asignado, en este caso, de la referida Fiscalía, debe consultar diariamente el repositorio correspondiente,

---

<sup>8</sup> **Artículo 9.** Los acuerdos y las diversas resoluciones se podrán generar electrónicamente con FIREL del Ministro Presidente o del Ministro instructor, según corresponda, así como del secretario respectivo; sin menoscabo de que puedan firmarse de manera autógrafa y, una vez digitalizados, se integren al expediente respectivo con el uso de la FIREL.

<sup>9</sup> **Artículo 16.** En los órganos jurisdiccionales del PJJ para la consulta y trámite de la documentación que les sea remitida por la SCJN a través del MINTERSCJN, se estará a lo siguiente: (...).

II. Para acceder a la información relativa a un requerimiento específico, se deberá ingresar al vínculo denominado “*Ver requerimiento o Ver desahogo*”. En dicho vínculo será consultable una pantalla en la cual se indiquen los principales datos tanto del expediente de origen como del correspondiente al asunto radicado en el índice de ese órgano jurisdiccional del PJJ, así como copia digitalizada del proveído dictado en la SCJN y, en su caso, de las constancias anexas a éste, documentos que tendrán visible en su parte inferior la evidencia criptográfica de la FIREL del servidor público de la SCJN responsable de su ingreso al MINTERSCJN. El acuse de envío que hará las veces del oficio de notificación, estará firmado electrónicamente por el servidor público de la Oficina de Actuaría de la SCJN responsable de la remisión electrónica; (...).

<sup>10</sup> **Artículo 16.** En los órganos jurisdiccionales del PJJ para la consulta y trámite de la documentación que les sea remitida por la SCJN a través del MINTERSCJN, se estará a lo siguiente:

I. Mediante el uso de la clave de acceso asignada y con su FIREL, el servidor público autorizado de un órgano jurisdiccional del PJJ deberá acceder diariamente a este submódulo del MINTERSCJ (sic), específicamente a su sección denominada “*Información y requerimientos recibidos de la SCJN*”, en la cual tendrá acceso a un listado de los requerimientos y/o desahogos remitidos desde la SCJN al órgano jurisdiccional del PJJ de su adscripción; (...).



que da lugar a la generación de los respectivos acuses de envío y de recibo<sup>11</sup>.

**Cúmplase.**

Lo proveyó y firma el **Ministro Instructor Alberto Pérez Dayán**, quien actúa con el **Licenciado Eduardo Aranda Martínez**, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.

Esta hoja corresponde al proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, dictado por el **Ministro Instructor Alberto Pérez Dayán**, en el incidente de suspensión formado en la controversia constitucional **69/2023**, promovida por el Municipio de San Pedro, Estado de Coahuila de Zaragoza. Conste.

SRB/JHGV/ANRP. 1

---

<sup>11</sup> Lo anterior, además, atendiendo al criterio sustentado en la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de apelación **4/2021** derivado del juicio ordinario civil federal **2/2020**, resuelto por mayoría de cuatro votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández quien está con el sentido, pero se separó de los párrafos treinta y treinta y uno, los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente). Votó en contra el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien se reservó el derecho de formular voto particular.

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN CONTROVERSI A CONSTITUCIONAL 69/2023

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: Acuerdo.doc

Identificador de proceso de firma: 198262

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre	ALBERTO GELACIO PEREZ DAYAN	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	PXDA601213HDFRYL01			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6673636a6e000000000000000000000019d3	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	02/03/2023T18:31:26Z / 02/03/2023T12:31:26-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma	e4 19 0a 3f b6 fb 80 3f f1 cb 6f 2e 74 ab a7 6c 6c 06 34 22 68 57 70 b6 d5 fc f7 87 25 17 14 46 64 a3 58 fc 3b 4e 30 d1 84 59 9e 5e 41 df 4c 45 34 29 82 e3 39 45 6a f7 9b 23 c2 e0 a4 10 7f 60 8f 72 8d 28 25 47 28 1c 13 21 80 f3 4f 04 28 e7 7c ef 1e 66 33 61 2f 99 fb a4 17 d3 ca d6 a6 3b 92 d0 b2 57 b4 c1 f9 57 3e 30 85 4d 80 24 84 a2 06 43 31 8b 3d 82 74 27 fd b4 af 44 3a ad 47 62 6b 40 6e 33 8e 68 54 58 c2 53 2d 66 63 7f 0c 3b b7 df 40 a2 73 10 f1 f1 9c 4f b3 93 d2 eb 36 19 a0 4f 99 ce 36 39 94 ad f4 8d 97 3f 6e c3 1f 81 0a e7 f1 7e 43 b5 d6 7a bd cb 2b 71 0e fe 6f cc 23 7d 31 c4 25 5e a0 0d 96 f4 a8 6a 3d 86 2c 69 c0 78 3b 07 e6 a0 1a 36 b7 cb 55 5d 42 36 4e 9e 92 99 d8 05 35 ed 70 5b 73 e9 51 6e 54 a8 ee c0 64 62 bd 33 94 ba 3a 43 7f 7e 70 0d 73 12 e4 22			
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	02/03/2023T18:31:26Z / 02/03/2023T12:31:26-06:00			
Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
Emisor del certificado de OCSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
Número de serie del certificado OCSP	706a6673636a6e0000000000000000000000000019d3				
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	02/03/2023T18:31:26Z / 02/03/2023T12:31:26-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	5551696			
	Datos estampillados	4F6ED56B602512A9BB2CC735509252EBE41FD1A42C089C8021F05B759661E086			

Firmante	Nombre	EDUARDO ARANDA MARTINEZ	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	AAME861230HOCRRD00			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6620636a66000000000000000000000002b8df	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	02/03/2023T17:57:29Z / 02/03/2023T11:57:29-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma	7b c4 fe e2 40 db fa 7c 3f f7 33 05 e1 9e 9d c7 78 fd eb f3 e4 ab f7 73 10 c1 38 c1 93 7e 06 cb 8f 8a 97 a1 2a cd 1f 59 f7 a3 cb 35 e2 8f 63 fd cd 88 15 c8 a5 bc 01 6a e5 ac 3d 7c 24 51 22 1d ee 37 30 5a f9 e6 2c e3 13 6d a8 67 6f c5 d0 a4 f6 96 a9 83 30 b2 d6 7c f9 c6 6c 96 83 89 4a e5 85 75 df a9 d9 ba 15 04 d6 9a 96 ef d0 94 1b 35 29 2a bf ff d9 06 e2 1c a2 82 fc 62 7c 5c 1f 65 24 a0 36 a8 99 86 2b fb b3 56 3a a2 cb 06 bf 11 b1 a0 f7 51 8f ed 6a 42 6b 2c 31 17 83 14 94 3a cf ac a1 7a 34 8d a3 d9 93 06 35 68 2e 41 a4 bf da 83 ca 42 ef ce f9 6a f2 49 f9 12 11 0e 3b ed c7 94 8e cc ee fb 54 fa 2c d4 6d 4f d0 51 3e 6b 7f 47 ba 7c ce 79 dc e1 a3 c5 b6 30 e6 6b 9c d2 18 06 16 03 a5 cf d2 a3 6a f2 6f 19 27 bf ae cf 0e aa ed d9 76 27 6c 9d 81 e3 1d 00 04 64 71 e9			
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	02/03/2023T17:57:33Z / 02/03/2023T11:57:33-06:00			
Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Número de serie del certificado OCSP	706a6620636a6600000000000000000000000002b8df				
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	02/03/2023T17:57:29Z / 02/03/2023T11:57:29-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	5551356			
	Datos estampillados	ED4CD6CF68A90ADCA6E5C7A130E9DAA948F52096FE9CD39843D3834804393AC9			